

SANTA FE, 8 de noviembre de 2007.

Al Señor

**Presidente**

**Cámara De Diputados**

Su Despacho

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente con el objeto de comunicarle que esta Cámara, en la sesión celebrada en el día de la fecha, ha sancionado el

Proyecto de Ley, cuyo texto se adjunta.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

**Referencia**

Mensaje N° 3346 - Ley 7945 - Código Procesal Laboral: modifícase en el marco del Plan

Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina.

**Expediente N° 15292 - PE**

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE**

**L E Y :**

**ARTÍCULO 1º :** Modifícanse los arts. 2; 5; 6; 7; 8; 16; 17; 19; 20; 22; 23; 24; 34; 36; 37; 39;

41; 42; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 58; 59; 65; 68; 70; 71; 76; 82; 99; 109; 110; 111; 112; 113;

114; 115; 116, 117; 118; 119 y 120 de la ley 7945, los que quedarán redactados de la siguiente

manera:

**Art. 2. Competencia por razón de la materia.** Los jueces del trabajo serán competentes para

entender en:

a) los litigios entre trabajadores y empleadores por conflictos individuales de derecho derivados

del contrato de trabajo o de una relación laboral, o de aprendizaje, becas y pasantías, aunque la

pretensión se funde en disposiciones de derecho común;

b) los desalojos que se promuevan para la restitución de inmuebles, o parte de ellos, cuando su

ocupación se hubiere acordado o concedido con motivo o como accesorio de una relación

laboral, aunque no corresponda asignarle carácter remuneratorio según la legislación de fondo;

c) las demandas de restitución de muebles y efectos de una de las partes, bajo las mismas

condiciones que el inciso anterior;

d) las tercerías, en juicios de su competencia;

e) las acciones que promuevan las asociaciones sindicales por cobro de la cuota societaria,

contribuciones convencionales o en querellas por práctica desleal;

f) las pretensiones promovidas por la víctima de un siniestro laboral o sus derechohabientes

contra una aseguradora de riesgos del trabajo, un empleador autoasegurado o no asegurado,

cualquiera fuere el fundamento y alcance de la misma.

g) las demás causas contenciosas en que se ejerciten acciones fundadas en normas

internacionales, estatales o profesionales de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y para los

que la Constitución Nacional o la Constitución Provincial, o una ley de esta Provincia, no

hubieren establecido una competencia especial;

h) las causas que se promuevan para obtener la declaración de un derecho laboral, cuando el

estado de incertidumbre respecto de una relación jurídica individual, de sus modalidades o de su

interpretación, cause o pudiera causar un perjuicio a quien tenga interés legítimo en

determinarlo;

i) la repetición de los fondos depositados con motivo de multas aplicadas por la administración

laboral, cuando hubieren sido revocadas o reducidas mediante el recurso previsto en el artículo 3;

j) la homologación de los acuerdos que empleadores y trabajadores celebren con motivo de una

relación laboral y las controversias que se deriven de los mismos;

k) toda acción fundada en las garantías constitucionales de libertad sindical y trato igualitario en

el trabajo.

**Art. 5. Competencia territorial.** En las causas incoadas en materia laboral será competente a

elección del trabajador demandante: el juez del lugar del trabajo; el del domicilio del demandado

o el del lugar de la celebración del contrato. Si la prestación del servicio se hubiere ejecutado en

más de un lugar, será competente el de aquél que coincida con alguna de las otras pautas de

demandabilidad.

El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar de su última residencia.

Si la demanda fuera promovida por el empleador, será competente el juez laboral del domicilio

del trabajador.

En las causas promovidas por asociaciones profesionales por cobro de cuota sindical y

contribuciones convencionales, será competente el juez del domicilio del demandado.

En los supuestos de acciones derivadas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o

inculpables promovidas por un agente público, será competente el juez del lugar donde preste

servicios.

**Art. 6. Competencia por conexidad.** El juez que entiende en el proceso principal será

competente para conocer en todos sus incidentes, en las medidas preparatorias, en la ejecución

de sentencia y en el cobro de las costas. Entenderá también en las demandas de extensión de

responsabilidad en los supuestos que corresponda según las leyes de fondo.

**Art. 7. Competencia para las medidas cautelares.** En caso de urgencia, las medidas cautelares

podrán pedirse ante cualquier juez con competencia en materia laboral, prescindiendo de las

normas que establecen el turno. También podrán pedirse ante los jueces de cualquier otro fuero.

En ambos casos, la causa quedará radicada ante el juzgado de trabajo en turno a última hora del

día en que se promovió, con excepción de aquellos Distritos judiciales en los que se encuentre

habilitada la Mesa de Entradas Única.

**Art. 8. Cuestiones de competencia.** Las cuestiones de competencia tramitarán de acuerdo a lo

preceptuado en el Código Procesal Civil y Comercial, en tanto no resulte modificado en la

presente ley.

**Art. 16. Urgencia.** En casos de urgencia, la personería podrá invocarse y acreditarse conforme

lo establecido en el Código Procesal Civil y Comercial.

Los actos de representación se entenderán convalidados mediante la ratificación personal por el

representado o el otorgamiento de apoderamiento a quien lo hubiera invocado dentro del plazo

que el juez determine.

**Art. 17. Días y horas hábiles.** Serán días hábiles todos los del año, con excepción de los

sábados y domingos, feriados nacionales o provinciales, días no laborales, asuetos decretados por

la Corte Suprema de Justicia y los de feriado de los tribunales. Las horas hábiles son las que

median entre la apertura de atención al público y las 20.00 horas.

**Art. 19. Beneficio de gratuidad. Alcance.** Los trabajadores, sus derechohabientes y las asociaciones profesionales de trabajadores legalmente reconocidas, gozarán del beneficio de gratuidad. No abonarán las publicaciones que se ordenen en el Boletín Oficial, hallándose eximidos del pago de impuestos, tasas y de todo tipo de contribuciones provinciales o municipales. Los certificados del Registro Civil e informes de reparticiones oficiales se expedirán sin cargo. Ninguna norma arancelaria o impositiva podrá suspender o condicionar el dictado de la sentencia definitiva o de auto con fuerza de tal.

**Art. 20. Reposición por la empleadora.** Los empleadores gozarán de igual beneficio durante la tramitación del juicio pero, si en definitiva son condenados en costas, deberán reponer todas las actuaciones y el costo de las notificaciones diligenciadas a su instancia. Si las costas se declararen por su orden o se aplicaren en forma proporcional, repondrán la parte a su cargo.

**Art. 22. Notificación ficta. Retiro del expediente.** El retiro del expediente, conforme las formalidades de este código, importará la notificación de toda providencia, traslado o resolución judicial de data anterior. Igual efecto producirá la notificación personal del artículo precedente desde el día en que conste en autos, respecto de las providencias, traslados o resoluciones que sean antecedentes lógicamente relacionados con el acto del que se notifica.

**Art. 23. Notificación por cédula.** Deben notificarse por cédula, si no se hubiere notificado

conforme los artículos precedentes:

- a) la citación y emplazamiento para comparecer a estar a derecho y contestar la demanda;
- b) las citaciones a audiencias;
- c) los autos interlocutorios; el llamamiento de autos para sentencia y las sentencias definitivas;
- d) la concesión o denegación de recursos;
- e) los traslados, vistas, manifiestos en la oficina; las suspensiones o reanudaciones de términos y

trámites y el primer decreto que se dicte después de que el expediente hubiese estado paralizado por más de un año o que hubiese vuelto del archivo. En estos dos últimos casos la notificación,

- además, se cursará al domicilio real;
- f) las intimaciones, correcciones o sanciones disciplinarias;
  - g) la providencia que haga saber el juez que va a entender, a menos que lo sea por designación de nuevo titular;
  - h) la radicación de los autos en la Alzada;
  - i) las demás providencias de trámite, cuando así lo dispusiere el juez o tribunal.

**Art. 24. Cédulas: forma y firma.** Las cédulas se redactarán en la forma y con los recaudos

establecidos por el Código Procesal Civil y Comercial.

Salvo la que notifique la sentencia definitiva y aquellas que el juez o tribunal ordenen que sean

firmadas por el secretario, las cédulas en todos los casos podrán ser suscriptas por los

profesionales intervinientes previa notificación personal de su parte, bajo apercibimiento de

tenerlo por notificado a partir de la fecha de la cédula, cualquiera se la forma en que ésta sea

diligenciada.

A pedido de parte o de oficio, el juez o tribunal podrá ordenar la notificación por medios

electrónicos, telefónicos o informáticos, dejándose constancia en autos por secretaría, conforme

las leyes vigentes y la reglamentación que, al efecto, dictará la Corte Suprema de Justicia de la

Provincia.

**Art. 34. Domicilio procesal.** Quien comparezca ante la autoridad judicial deberá constituir en el

primer escrito domicilio procesal dentro del radio urbano de la ciudad o pueblo asiento del

tribunal o juzgado. Si no lo hiciere o el domicilio no existiere o no subsistiere, se considerará que

ha constituido domicilio procesal en secretaría y se le tendrá por notificado de cualquier

resolución o providencia desde el día siguiente al de su dictado.

El domicilio producirá todos sus efectos desde la fecha de la providencia que lo tenga por

constituido y se reputará subsistente mientras no se designe otro.

**Art. 36. Impulso procesal conjunto.** Presentada la demanda el procedimiento podrá ser

impulsado por el juez, por el tribunal o por las partes.

**Art. 37. Caducidad de instancia.** Pasado un año sin que se impulse el proceso, el juez o tribunal

- de oficio o a pedido de parte - deberá intimar a las partes para que dentro del plazo de tres días

manifiesten si tienen interés en la prosecución de la causa, y efectúen la petición idónea que

corresponda según el estado de los autos. Vencido este plazo sin que se exprese tal propósito, se

declarará la caducidad de la instancia, con los efectos previstos en el Código Procesal Civil y Comercial.

El procedimiento previsto en el párrafo anterior será de posible utilización sólo una vez durante el proceso.

Utilizado que hubiese sido, para las actuaciones posteriores el trámite será el siguiente:

transcurrido un año sin que se impulse el proceso, la caducidad podrá ser opuesta por vía de

acción o de excepción, antes de consentir cualquier acto del procedimiento. En tal caso, el juez o

tribunal oír a la contraria mediante traslado que se correrá por cinco días y procederá a resolver.

En cualquiera de los dos supuestos, la resolución será apelable únicamente si declara la caducidad.

El curso del término de caducidad corre durante los días inhábiles y empieza a contarse desde la

última actuación o diligencia destinada a impulsar el procedimiento, pero no correrá mientras los

autos estén pendientes de resolución judicial ni durante el tiempo que demande la reconstrucción

del expediente.

**Art. 39. La demanda.** La demanda deberá interponerse por escrito y expresará:

a) el nombre; domicilio real y procesal; nacionalidad; edad; estado civil y profesión del

demandante;

b) el nombre y domicilio del demandado, si se conocieren, o los datos que permitieren su

identificación;

c) el objeto de la acción, designando en forma clara, sucinta y separada los hechos y el derecho

en que se funda;

d) el monto discriminado de lo reclamado. Cuando no fuere posible precisarlo, podrá diferirse su

cálculo a la prueba pericial o a la estimación judicial. En tal caso, deberán indicarse los rubros

que componen la demanda y las pautas necesarias para liquidarlos, expuestos de modo tal que el

demandado pueda cuestionar o aceptar concretamente dichos extremos. El juez, en la sentencia,

podrá considerar como no demandados los rubros que, siendo posible, no se hayan propuesto con

los requisitos indicados;

e) el ofrecimiento de la prueba confesional y documental de que intente valerse.

Acompañará

copias de los documentos que obran en su poder en cantidad necesaria para agregar al expediente

y para el traslado de cada uno de los demandados. Individualizará los que no tuviere, indicando

el lugar en que se hallen, la persona física o jurídica u organismo en cuyo poder se encuentren, a

los efectos de su exhibición o remisión de copias autenticadas;

f) la petición en términos claros y precisos.

**Art. 41. Acumulación de pretensiones.** El demandante podrá acumular todas las acciones que

tenga contra el demandado siempre que:

a) sean de competencia de la justicia del trabajo;

b) no sean excluyentes entre sí;

c) puedan sustanciarse por los mismos trámites;

d) en caso de ser varios los demandantes o demandados, las acciones sean conexas por el objeto,

por los hechos o por la causa.

**Art. 42. Acumulación o separación de autos.** El juez podrá denegar la acumulación o disponer

la separación total o parcial de las acciones acumuladas cuando lo estime conveniente para la

unidad del proceso. En este caso, dispondrá que se prosigan las actuaciones por separado.

Asimismo, podrá decretar la acumulación de oficio. Ambas decisiones serán inapelables.

**Art. 47. Contestación.** La demanda será contestada por escrito que contendrá los siguientes

requisitos:

a) nombre; estado civil; nacionalidad; edad y domicilio real y procesal del demandado,

acompañándose - en su caso - los documentos habilitantes de la representación que invoca;

b) reconocimiento o negativa expresa de cada hecho expuesto en la demanda. El silencio, las

respuestas evasivas o las negativas genéricas podrán considerarse en la sentencia como

reconocimiento de los hechos a que refieran. Se entenderá que incurre en negativa genérica, con

iguales consecuencias, cuando omita su propia versión sobre la realidad de los hechos que no

pueda ignorar o que estuviere obligada a documentar;

c) reconocimiento o negativa expresa de la autenticidad de los documentos privados que se le

atribuyen, bajo apercibimiento de tenerlos por auténticos. Si le fuere imposible expedirse en base a copias, así lo manifestará a fin de que el juez ordene a la actora la exhibición de los originales en la audiencia de trámite;

- d) todas las excepciones formales y de fondo, acompañando u ofreciendo las pruebas pertinentes;
- e) el ofrecimiento de prueba confesional y documental, acompañando los documentos que obran en su poder. Si no los tuviere los individualizará, indicando en lo posible su contenido y el lugar donde se hallaren o personas físicas o jurídicas en cuyo poder se encontraren, a los mismos fines previstos en el art. 39, inciso "e";
- f) la reconvencción, si correspondiere;
- g) la petición en términos claros y precisos.

**Art. 49. Reconvencción.** Término para contestarla. Inadmisibilidad de la reconvencción. De la reconvencción interpuesta se correrá traslado al actor por el término de diez días, debiendo en su presentación y en el responde, cumplimentarse los requisitos de los artículos 39 y 47 de éste Código.

No será admisible la reconvencción cuando:

- a) el objeto del juicio fuere, exclusivamente, el cobro de remuneraciones;
- b) se demandare únicamente el desalojo;
- c) se reclamen indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional;
- d) se utilicen los procedimientos abreviados previstos en este Código.

**Art. 50. Incontestación de la demanda o reconvencción.** La falta de contestación de la demanda o de la reconvencción en el término legal importará el reconocimiento de los hechos expuestos por el actor o reconviniendo, salvo prueba en contrario.

**Art. 51. Audiencia de trámite.** Contestada la demanda y, en su caso, la reconvencción o vencido el término para hacerlo, el juez fijará de oficio una audiencia que deberá realizarse en un plazo no mayor de treinta días. Las partes deberán comparecer personalmente para lo cual, además de la notificación en el domicilio procesal, se las citará en el real, con una anticipación no menor de tres días, bajo apercibimiento de que la inasistencia injustificada será sancionada con una multa que graduará prudencialmente el juez, sin perjuicio de otros que en su caso correspondan.



Tratándose de personas de existencia ideal, podrán ser representadas por los directores, socios, gerentes o empleados superiores con poder suficiente y debidamente instruidos sobre los hechos

debatidos a los fines de asegurar el cumplimiento del objetivo de la audiencia.

La citación a la audiencia de trámite se realizará con la prevención de que, en casos

excepcionales de imposibilidad material de concurrir a la misma, las personas físicas deberán

hacerse representar en la conciliación por apoderado especial con instrucciones y mandato

suficientes. Las notificaciones correspondientes se efectuarán con transcripción de este párrafo.

La audiencia de trámite se ajustará al siguiente ordenamiento:

#### I - CONCILIACIÓN:

A) El juez intentará conciliar a las partes, no significando prejujuamiento las apreciaciones que

podiere formular en las tratativas correspondientes.

B) La conciliación podrá promoverse en forma total o parcial respecto de las pretensiones

deducidas y estará dirigida hacia los siguientes fines:

1. Lograr el acuerdo de las partes. Si ello se consigue, se concretarán las bases del acuerdo de

manera que no afecten los derechos irrenunciables establecidos por las leyes.

2. Simplificar las cuestiones litigiosas.

3. Aclarar errores materiales.

4. Reducir la actividad probatoria en relación a los hechos, tendiendo a la economía del proceso.

C) Obtenido un acuerdo entre las partes sobre cualquiera de los aspectos señalados, se hará

constar en el acta de la audiencia, debiendo ser homologado por el juez en resolución fundada.

La homologación producirá el efecto de cosa juzgada.

#### II - CONTINUACIÓN DEL DEBATE:

A) Si la conciliación hubiera sido parcial el trámite proseguirá respecto de los puntos no

avenidos, sin perjuicio del procedimiento de pronto pago que establece este Código.

B) Si no hubiere conciliación, continuará el procedimiento del juicio en la misma audiencia.

#### III - CUESTIÓN DE PURO DERECHO:

Si la cuestión fuere de puro derecho, así se declarará por decisión inapelable, sin perjuicio de los

recursos que correspondan contra la sentencia. En estos casos, las partes podrán alegar oralmente

en el mismo acto, de cuyo contenido quedará constancia en acta, o presentar un memorial escrito dentro de los cinco días. La sentencia se dictará dentro de los diez días siguientes a la celebración de la audiencia.

#### IV - ACTIVIDAD PROBATORIA:

Cuando hubiere hechos controvertidos o de demostración necesaria en la cuestión principal, se abrirá la causa a prueba por el término de cuarenta días. Se recibirá la confesional de ambas partes y el reconocimiento de documental por parte del actor.

Las partes ofrecerán de inmediato y por su orden toda la prueba de que intenten valerse y que no corresponda ofrecer en la demanda, en la contestación y en la reconvención y su contestación. El juez proveerá en el mismo acto. Cuando alguna diligencia hubiere de realizarse fuera de la

Provincia o la naturaleza de la cuestión en debate lo justificara, el juez, por resolución fundada

podrá ampliar el plazo hasta un máximo de veinte días más.

Si se hubiere ofrecido prueba pericial, se proveerá lo conducente a la designación de los peritos y

se fijarán los puntos de pericia en el mismo acto.

#### **Art. 52. Casos de incomparecencia.**

I - REGLA GENERAL: La incomparecencia de una o ambas partes a la audiencia de trámite no

suspenderá, en ningún caso, la realización de la misma, salvo acuerdo en sentido contrario

presentado hasta el día anterior al fijado para su realización. No se podrá suspender la audiencia

por este motivo más de una vez.

II - APODERADOS: En ningún caso la ausencia de la parte dispensa a su apoderado de

concurrir a la audiencia ni de realizar los actos procesales concernientes a la misma, salvo el

supuesto contemplado en el párrafo anterior.

Si el ofrecimiento de prueba fuera realizado por un abogado o procurador que patrocinó al

litigante ausente en alguno de sus escritos anteriores, se tendrá por válido si fuera ratificado por

el mismo dentro del plazo dispuesto en el párrafo siguiente. Dicha ratificación es independiente

al hecho que finalmente se justifique o no su ausencia.

III - JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA: En caso de que una o ambas partes justificaren su

inasistencia a la audiencia hasta el tercer día hábil posterior a su realización, el juez fijará una nueva fecha de audiencia, dentro del período de prueba, al solo efecto de la conciliación y de rendir la confesional del impedido, si esta prueba se hubiere ofrecido oportunamente. En caso contrario, se aplicarán los apercibimientos previstos en este Código para el ausente.

**Art. 53. Concentración.** Salvo lo dispuesto en el artículo anterior respecto de la absolución de posiciones, el trámite de la audiencia se completará en un solo acto, habilitándose a tal efecto las horas que fueren necesarias.

**Art. 54. Falta de contestación de la demanda o de la reconvención.** El demandado que no ha contestado la demanda, o el actor que no ha contestado la reconvención, pueden comparecer a la audiencia de trámite y ofrecer pruebas, excepto confesional y documental, salvo lo que prescribe este Código para la presentación tardía de documentos. Si el demandado no contestó la demanda y no comparece a la audiencia, se recibirá la prueba ofrecida por la contraria y se dictará sentencia sin más trámite, salvo las medidas para mejor proveer que dispusiere el juez.

**Art. 58. Medios.** Se admitirán como medios de prueba los siguientes: confesional, documental, testimonial, instrumental, pericial, informativa, inspección judicial y las presunciones o indicios.

No se admitirán pruebas que sean manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias, cuya producción podrá denegar de oficio el juez, mediante resolución fundada.

Cuando se ofreciere algún otro medio de prueba idóneo o pertinente no previsto de modo expreso en este Código, el juez valorará fundadamente y sin recurso alguno su admisibilidad y,

en su caso, la forma y modo de diligenciarla estableciendo el procedimiento a seguir conforme las circunstancias del caso.

**Art. 59. Admisibilidad y pertinencia. Recurribilidad.**

a) La prueba deberá recaer sobre hechos controvertidos o de demostración necesaria, debiendo cada parte probar los presupuestos de hecho de la posición que sustenta en el supuesto de que

fuera controvertida, sin perjuicio de las presunciones establecidas a favor del trabajador tanto en las leyes de fondo como de forma, en estatutos especiales, convenios colectivos de trabajo o normas de policía laboral.

El juez o tribunal, en oportunidad de fallar, podrá valorar excepcionalmente la distribución del esfuerzo probatorio derivado de esta regla cuando las circunstancias particulares de la causa determinen que una de las partes se encontraba en mejores condiciones fácticas, técnicas o profesionales para producir cierta prueba.

b) Todo el material probatorio producido y que se juzgue conducente y relevante, será valorado de conformidad con las reglas de la sana crítica. Los jueces sólo tienen el deber de ponderar las pruebas que consideren esenciales para dirimir la causa.

c) Ningún auto o decreto relativo a la prueba es apelable. Procederá el recurso de nulidad contra la sentencia dictada en virtud de un procedimiento por el que se hubiere negado el despacho de alguna diligencia probatoria.

**Art. 65. Admisión.** Sólo se admitirá la prueba confesional una vez y en primera instancia.

Deberá ofrecerse con la demanda o la contestación acompañando el pliego respectivo y se producirá en la audiencia de trámite, salvo el supuesto previsto en el artículo 52 para el caso de ausencia de la parte .

**Art. 68. Personas de existencia ideal.** Si se tratare de personas de existencia ideal, además de los representantes legales, podrán absolver posiciones sus directores, socios, gerentes o empleados superiores con mandato suficiente y debidamente instruidos sobre los hechos en debate, correspondiendo su elección a la persona de existencia ideal, salvo que la contraparte invoque razones concretas y atendibles que justifiquen la comparecencia de otra persona de las enumeradas en este artículo. En todos los casos, esta prueba será rendida por un solo absolvente, aunque los estatutos o el contrato social exigieren la actuación conjunta de dos o más personas.

El apoderado de cualquiera de las partes, con poder especial o general para pleitos, aun cuando el instrumento lo habilite, no podrá absolver posiciones, salvo que - en el supuesto de tratarse de

una persona de existencia ideal - reúna alguna de las condiciones establecidas en el primer párrafo.

**Art. 70. Lugar de la absolución.** La absolución de posiciones debe prestarse ante el juzgado de la causa, a menos que el juez, mediante resolución fundada, disponga comisionar su recepción al juzgado que corresponda al domicilio real del absolvente que conste en los autos.

**Art. 71. Reconocimiento o negativa.** Los documentos acompañados por las partes en la demanda, en la contestación, o en la reconvención y su contestación, deberán ser reconocidos o negados en su autenticidad o recepción, en las siguientes oportunidades procesales:

- a) para los documentos acompañados con la demanda, en el escrito de responde;
- b) para los documentos acompañados al interponer excepciones, al tiempo de contestarlas;
- c) para los documentos acompañados en la contestación de la demanda o reconvención, en la audiencia de trámite;
- d) para los documentos que se presentaren con posterioridad a la audiencia, ya sea de fecha posterior a la misma o que hubieran llegado a conocimiento de las partes después de su celebración, en la forma que establezca el juez o tribunal en ejercicio de sus facultades.

En todos los casos, bajo apercibimiento de tenerlos por reconocidos o recibidos.

**Art. 76. Designación.** Si cualquiera de las parte ofreciere prueba pericial, se procederá a la designación de peritos, por sorteo, conforme las normas vigentes. Ambas partes de común acuerdo podrán proponer la designación de un perito para la realización del acto pericial. La diligencia pericial será practicada por un perito, a menos que, de oficio o a pedido de parte, se decida ampliar su número a tres, según la complejidad e importancia de la pericia. Si la designación fuere propuesta por acuerdo de partes y en interés común, el cobro de la totalidad de los honorarios periciales podrá ser reclamado -oportunamente- a cualquiera de las partes que lo hubieran propuesto.

**Art. 82. Honorarios.** Cuando el trabajador resulte vencido y condenado en costas, los honorarios del perito serán abonados por la Provincia, salvo:

- a) cuando se justifique sumariamente que aquél reúne capacidad de pago suficiente en relación al

monto reclamado;

b) cuando, por resolución fundada del juez o tribunal, o del contenido de la sentencia, emergiera que la decisión de la causa a favor de la ganadora dependió del acto pericial, en cuyo caso serán a su cargo.

En el supuesto previsto en el primer párrafo de este artículo, la regulación de honorarios del perito se notificará a la Provincia, en la persona del Fiscal de Estado, con detalle de los autos y tribunal donde tramitan. Contra dicha regulación, la Provincia podrá interponer revocatoria y apelación en subsidio, en trámite al que se imprimirá la vía incidental. Notificada la Provincia,

firmada y consentida la regulación de honorarios, se le intimará su pago dentro de los treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación. En el supuesto que no se hubiese cancelado en aquel tiempo el importe adeudado, el perito podrá ejecutarlo por vía del trámite de ejecución de sentencia previsto en este Código.

**Art. 99. Aclaratoria.** El juez o tribunal podrá, a pedido de parte, dentro del término de tres días de la notificación de la sentencia, corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión que hubiere sobre las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. El recurso se resolverá sin sustanciación alguna al día siguiente.

La aclaratoria no interrumpe los plazos para la interposición de los recursos que pudieren corresponder.

**Art. 109. Interposición. Forma y plazo . Domicilio. Efecto. Concesión.**

I- INTERPOSICIÓN:

La apelación será deducida dentro de los cinco días de la notificación, debiendo el apelante especificar expresamente si la impugnación es total o parcial. Ante la falta de especificación acerca de los alcances del recurso, se considerará que la apelación se interpone contra la totalidad de la sentencia.

Si el recurso de apelación fuera interpuesto en forma parcial, se precisarán los puntos o rubros del fallo que se recurren; ante el incumplimiento de este recaudo, el juez intimará al apelante

para que en el plazo de dos días subsane la insuficiencia, bajo apercibimiento implícito de tener por no interpuesto el recurso. En ambos casos, si el Tribunal de Alzada advirtiera, al momento de dictar sentencia, que el apelante no expresó agravios respecto de rubros económica o jurídicamente relevantes, o que los vertidos fueran notoriamente inconsistentes en relación con los hechos o pruebas de la causa, deberá aplicar las sanciones económicas a que diera lugar la conducta procesal abusiva o dilatoria, graduadas prudencialmente.

#### II- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:

Cuando la sede del tribunal de apelación no estuviera en el mismo lugar que la del juzgado, las partes deberán constituir domicilio procesal en el asiento del primero, en las siguientes

oportunidades procesales:

- a) la apelante, al interponer el recurso de apelación;
- b) la apelada, ante el mismo juez de primera instancia, dentro de los tres días de notificársele la concesión del recurso.

En caso de omitirse el cumplimiento de este requisito, se tendrá por constituido domicilio

procesal en la secretaría del tribunal de apelación.

#### III - EFECTO:

El recurso de apelación, excepto que este Código establezca algo distinto, será concedido con efecto suspensivo.

#### IV - CONCESIÓN. REMEDIOS:

El juez proveerá el recurso sin sustanciación alguna. El auto o decreto por el que se conceda un recurso podrá ser revocado, modificado o reformado por el juez que lo dictó y también por el tribunal de alzada. En ambos casos, el reclamo se formalizará mediante el pedido de reposición.

El rechazo de la impugnación no impide su reiteración ante el tribunal de alzada.

**Art. 110. Elevación de los autos. Apelación inmediata y diferida.** En los casos de los incisos

- a) y b) del artículo 108, concedido el recurso se elevarán los autos al superior para su sustanciación, inmediatamente después de vencidos los plazos del artículo 109.

En los casos de los incisos c) y d) del mismo artículo, el recurso se sustanciará conjuntamente con el que se concediere contra la sentencia definitiva, o de manera autónoma en el caso en que

la sentencia no hubiera sido recurrida, siempre que el mismo se hubiera deducido en tiempo y forma y se mantuviera en la alzada.

**Art. 111. Desistimiento.** El apelante podrá desistir de los recursos interpuestos. Si el desistimiento se formalizara antes de expresar agravios, no generará costas.

**Art. 112. Procedencia.** Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38, el recurso de nulidad sólo procederá contra las sentencias definitivas y autos posteriores a ésta, pronunciados con violación u omisión de las formas y solemnidades que prescriben las leyes y que asuman el carácter de sustanciales.

**Art. 113. Interposición y sustanciación.** Se interpondrá conjuntamente con el recurso de apelación, en el mismo plazo y se sustanciará por los mismos trámites. La interposición de uno no llevará implícito el del otro y deberán sostenerse de manera autónoma ante la Alzada.

**Art. 114. Efectos.** Si el procedimiento estuviera arreglado a derecho y la nulidad proviniera de la forma y contenido de la resolución, el tribunal de apelación así lo declarará y dictará la que corresponda.

Si la nulidad proviniera de vicio en el procedimiento, se declarará nulo lo obrado que se relacione con la actuación nula o que sea su consecuencia y se remitirán los autos al juzgado que por orden de nominación corresponda para que tramite la causa y dicte resolución.

**Art. 115. Interposición. Trámite.**

a) Si el juez denegare los recursos de apelación o nulidad, el recurrente podrá acudir directamente ante el tribunal de alzada pidiendo la concesión del recurso. El recurso directo se interpondrá dentro de los cinco días posteriores a la notificación de la denegatoria si el superior tuviera su asiento en el lugar del juicio y de los diez días en los otros casos, acompañando copia de las resoluciones recurridas y su notificación, del escrito de interposición del recurso y del auto o decreto denegatorio del recurso y su notificación. El tribunal de alzada puede solicitar los informes sobre cualquier circunstancia de la causa y, excepcionalmente, requerir la elevación de los autos principales para su consulta, debiendo reintegrarlos en el término de tres días.



b) Presentado el recurso directo, el tribunal decidirá, sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado y la forma o modo de su otorgamiento si correspondiera. En el primer caso, remitirá las copias al juez de primera instancia; en el segundo, ordenará la elevación de los autos principales para tramitar el recurso.

**Art. 116. Remisión a leyes particulares.** Los recursos especiales, tanto ordinarios como extraordinarios, legislados y regulados en leyes particulares, se sustanciarán por los trámites previstos en las mismas, sin perjuicio de otros que se establezcan en este Código.

**Art. 117. Procedimiento en la Alzada.**

I - RECEPCIÓN DE LOS AUTOS. NOTIFICACIÓN:

Recibidos los autos en el tribunal de alzada, se notificará a las partes la integración del tribunal.

Dentro de los cinco días de efectuada la notificación, deberán plantearse las cuestiones relativas

a la concesión del recurso efectuado por el juez de primera instancia, según lo establecido en el apartado IV del art. 109.

II - EXPRESIÓN DE AGRAVIOS:

Consentida la integración del tribunal, se correrá traslado al apelante para que exprese sus

agravios dentro del término de cinco días cuando la sede del tribunal de apelación estuviera en la

misma ciudad que la del juzgado a quo o por diez días en los demás supuestos, con

apercibimiento de tenerse por operada la deserción del recurso.

De la expresión de agravios se correrá traslado al apelado por igual término. Si ambas partes

hubieran recurrido, se correrán los traslados por su orden, debiendo la demandada expresar los

suyos al contestar los de la actora. De estos últimos se correrá traslado a la otra parte.

**Art. 118. Expresión de agravios. Requisitos.** La expresión de agravios deberá fundarse y

contener la crítica concreta y razonada de los puntos de la sentencia que el apelante considere

equivocados, precisando los errores de hecho o de derecho en los que hubiere incurrido. La

omisión de este requisito podrá ser tomada por el tribunal, al decidir la causa, como conformidad

con las afirmaciones contenidas en aquella. No resulta admisible la simple remisión a

presentaciones anteriores.

En todos los supuestos se examinarán los agravios de conformidad con lo establecido en el art.

109.

**Art. 119. Conclusión de la causa.** Contestados los agravios o vencido el plazo para hacerlo, se dictará sentencia dentro del término de quince días.

**Art. 120. Tribunal pleno o plenario.** En los supuestos en los que se peticione la formación de

tribunal pleno o plenario, se procederá de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del

Poder Judicial. El pedido de tribunal pleno o plenario deberá girarse a la Presidencia a fin de que

la Cámara examine, por simple mayoría de votos, los requisitos de admisibilidad del pedido, de

conformidad con las pautas establecidas en aquella. En el supuesto de Tribunal plenario, actuará

la Presidencia de la Cámara donde tramitan los autos.

**ARTÍCULO 2:** Incorpórase como art. 47 bis, el siguiente:

**Art. 47 bis. Excepciones. Oposición y trámite.** Opuestas excepciones, se correrá traslado a la

contraria para que las conteste dentro del término de diez días y, en su caso, ofrezca y acompañe

las pruebas pertinentes. Contestado el traslado el juez resolverá de modo inmediato las de

defecto legal, falta de personería, litispendencia y cosa juzgada judicial, como así también las

demás excepciones que fueren articuladas como de puro derecho o que pudieren resolverse con

las constancias ya incorporadas a la causa. Las excepciones que requieran de la producción de

prueba serán resueltas en la sentencia definitiva.

**ARTÍCULO 3:** Sustitúyense los Títulos IX, X y XI de la ley 7945, los que quedarán redactados

de la siguiente manera:

Título IX. PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS

### **Capítulo I. Pronto pago**

**Art. 121. Procedencia del pronto pago.** Si una de las partes, en cualquier estado del juicio o en

acuerdo celebrado en sede administrativa, reconociera adeudar a la otra algún crédito cuyo

importe fuera líquido o pudiera liquidarse por simples operaciones contables y tuviera por origen

la relación laboral, el juez, a petición de parte, ordenará su inmediato pago, quedando expedito

en caso contrario el procedimiento establecido por este Código para su ejecución.

En caso de que la sentencia fuere consentida parcialmente, procederá igualmente el pago inmediato o la ejecución en lo que no ha sido objeto de recurso.

## **Capítulo II. Procedimiento declarativo con trámite abreviado**

**Art. 122. Condiciones generales de procedencia.** Procederá el trámite reglado en este capítulo

cuando el trabajador, al demandar el pago de una suma de dinero líquida o que se puede liquidar

mediante simples operaciones contables:

a) invoque pretensiones que tornen innecesario cualquier debate causal o de derecho en torno a la

procedencia del crédito; y

b) lo haga con respaldo documental que confiera fuerte probabilidad de ser ciertas las

circunstancias de hecho de las que dependa la existencia y cuantificación de aquél.

A los fines de la admisibilidad, bastará con la atribución del documento a la contraparte o, en

caso de instrumentos públicos o privados emanados de terceros, que se identifique claramente al

autor y, en su caso, al fedatario o a la oficina en que pueden recabarse.

La utilización de esta vía no implica renunciar a los mejores derechos de los que el actor se

considere titular, por los mismos o distintos rubros, ni es incompatible con su reclamo por el

trámite ordinario. Utilizadas ambas vías, entenderá en ellas el juez o tribunal que hubiere

prevenido.

**Art. 123. Enunciación de supuestos de procedencia.** Sin perjuicio de otros supuestos

adecuados a las condiciones generales de procedencia, bajo sus exigencias, se entenderá

especialmente que habilitan esta vía:

a) el despido directo sin invocación de causa, o en que la invocada viole de modo evidente la

carga de suficiente claridad o resulte manifiestamente inconsistente con la configuración legal de

la injuria;

b) el despido indirecto por falta de pago de haberes, previamente intimados;

c) el despido directo justificado en fuerza mayor o en falta o disminución de trabajo, respecto de

la indemnización atenuada que corresponde en tales casos;

d) el pago de la indemnización acordada por la ley en los demás supuestos de extinción del

contrato que sólo dependan de la verificación objetiva de un hecho, siempre que el mismo se

documento con la demanda; en el supuesto de la indemnización por incapacidad absoluta e inculpable se entenderá verificado, a estos fines, si se acompaña dictamen médico oficial que acredite una incapacidad del 66% o más;

e) el pago de salarios en mora, cuando con la demanda se acompañen copias de recibos por períodos anteriores u otros instrumentos de los que se desprenda verosímilmente que la relación laboral se encontraba vigente al momento en que se afirman devengados.

**Art. 124. Tutela de la representación gremial.** El trámite reglado en este título se aplicará a la demanda por reinstalación prevista en la Ley de Asociaciones Sindicales cuando se acompañen a la misma las certificaciones expedidas por la entidad sindical relativas a su candidatura o investidura, constancia de la notificación escrita de su postulación o designación al empleador y de la comunicación al representante o candidato, del acto prohibido o vedado por la legislación sustantiva. En tal caso, no se admitirá como oposición válida ninguna defensa basada en la justificación sustancial del acto, ni tampoco impugnaciones referidas a la investidura que no hayan sido realizadas por escrito antes de comunicar la medida.

**Art. 125. Certificaciones.** El trámite abreviado procederá también para demandar la entrega de los certificados de trabajo, de aportes o de formación profesional que deban expedir los empleadores al término de una relación laboral, de aprendizaje, de pasantía o modalidades asimilables, conforme a las disposiciones legales, convencionales o reglamentarias del Derecho del Trabajo, toda vez que de la documentación acompañada se desprendan las circunstancias de hecho que deban asentarse en las mismas.

**Art. 126. Demanda.** La demanda deberá proponerse con los requisitos del art. 39, y las

siguientes modificaciones:

a) la identificación del demandado y denuncia de su domicilio como requisito insoslayable;

b) no se admitirá ninguna otra prueba que la informativa o pericia caligráfica necesaria para corroborar, de ser negada, la autenticidad de algún instrumento identificado en la demanda, o su envío o recepción;

c) deberá cuantificarse el crédito, o suministrarse con detalle y precisión las bases para las operaciones contables pertinentes.

**Art. 127. Resolución. Notificación. Embargo.** Recibida la demanda, si el juez considerase satisfechas las exigencias de admisibilidad del trámite y entendiera que resulta competente, dictará resolución ordenando el cumplimiento de la obligación demandada dentro de los diez días.

La resolución se notificará en el domicilio real, no siendo admisible la citación por edictos.

Podrá igualmente, a pedido del actor, ordenarse la traba de embargo preventivo por el importe de la demanda, sus intereses y costas.

Las medidas cautelares se entenderán siempre dictadas bajo la responsabilidad del solicitante. En

casos especiales el juez, por auto fundado, podrá exigir contracautela.

**Art. 128. Traslado. Apercibimiento.** La resolución del artículo anterior conlleva implícitamente un traslado para que, en igual término, el demandado se allane o se oponga.

Dicho traslado se hará bajo apercibimiento de que el silencio o la falta de oposición idónea

producirá el efecto de consolidar la resolución notificada, que en tal caso pasará en autoridad de

cosa juzgada material.

**Art. 129. Allanamiento.** En el contexto de este título el allanamiento supone la renuncia a

discutir la procedencia sustancial de la pretensión demandada. Producido, concluye la fase

declarativa quedando expedita la ejecución conforme a las normas de este código, en la que sólo

podrán discutirse los aspectos aritméticos de la liquidación.

Podrá también hacerse, por escrito, un ofrecimiento de cancelación total en cuotas con fechas

ciertas de pago. Aceptada del mismo modo la propuesta por el actor, su posterior incumplimiento

dará derecho al trabajador a ejecutar sin más trámite la totalidad del saldo.

**Art. 130. Oposición.** Dentro del plazo acordado para el cumplimiento, el demandado podrá

oponerse a la procedencia del trámite abreviado.

Además de la prescripción, la oposición sólo se admitirá con los siguientes fundamentos:

a) falsedad extrínseca de los documentos atribuidos a la demandada o a terceros, o negativa del

envío o recepción de la correspondencia en su caso;

b) hechos o actos jurídicos extintivos de la obligación demandada, debidamente documentados;

c) negativa sobre el fundamento fáctico o jurídico del crédito con base en razones que, apreciadas estrictamente por el juez, resulten en la necesidad o conveniencia de imprimir a la especie el trámite ordinario.

Las cuestiones puramente aritméticas relativas a la cuantificación del crédito no autorizan a

oponerse y serán diferidas a la etapa de ejecución, sin perjuicio de la facultad judicial de

convocar a audiencia conciliatoria.

Los reconocimientos parciales que resulten explícitos, o aquellos que deriven de la falta de

oposición expresa y concreta a ciertos rubros, o a una porción de los mismos, darán lugar a que

se declare su pronto pago según el capítulo anterior.

**Art. 131. Trámite de la oposición.** El juez podrá rechazar liminarmente las oposiciones que no

se ajusten a las exigencias del artículo anterior. En caso contrario, correrá traslado por cinco días

a la actora para que se expida sobre el mérito de la oposición, debiendo en tal oportunidad

reconocer o negar los documentos que en la misma se le hubieren atribuido.

**Art. 132. Prueba de la documentación atribuida.** Cuando la impugnación se hubiere basado

en documentos cuya autenticidad o recepción estuviere controvertida, el juez deberá disponer,

antes de expedirse, la producción de la prueba pericial o la informativa necesaria para dirimir el

punto.

**Art. 133. Sentencia. Recursos.** Oídas las partes y diligenciada en su caso la prueba del artículo

anterior, el juez dictará sentencia dentro del plazo de cinco días admitiendo o rechazando la

oposición.

Si hiciere lugar a la oposición, será inapelable para el actor, pero se considerará que hace cosa

juzgada meramente formal y no impide la promoción o continuación del trámite ordinario por los

mismos rubros. La prueba producida con control de partes en este pleito podrá trasladarse al

juicio ordinario.

Si rechazare la oposición, la sentencia podrá ser apelada dentro del término de cinco días y se

concederá con elevación inmediata y efecto suspensivo. Es requisito de su admisión la fundamentación simultánea. Elevados los autos, la recurrida podrá presentar memorial dentro de los cinco días de notificarse la radicación en la alzada.

**Art. 134. Sanciones. Costas. Honorarios.** La negativa injustificada de la autenticidad de documentos atribuidos o del envío o recepción de correspondencia será juzgada como abusiva y el juez deberá aplicar con especial rigor, las sanciones previstas por la legislación de fondo o adjetiva para los supuestos de conducta procesal temeraria o dilatoria. El demandado vencido en la oposición que dedujere soportará las costas del trámite, y los

honorarios se regularán en tal caso como si correspondiere a un juicio de conocimiento completo.

Si dentro del plazo de tres días desde la notificación de la resolución del artículo 127 el demandado se allanare a la reincorporación del candidato o representante gremial, las costas se impondrán por su orden, quedando en tal caso expedita para el actor la ejecución de los salarios caídos que correspondieren según la naturaleza del acto.

En todos los demás supuestos se estará a las disposiciones comunes sobre imposición o distribución de costas, pero los honorarios se regularán con reducción de un cincuenta por ciento.

### **Capítulo III. Demandas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales**

**Art. 135. Procedencia del pronto pago.** Cuando en sede administrativa, provincial o nacional, hubiere quedado firme la determinación de un crédito imputado a indemnización tarifada por accidente de trabajo o enfermedad profesional, la demanda para obtener su cobro tramitará por la vía del pronto pago.

**Art. 136. Procedimiento.** Cuando la naturaleza laboral del accidente o enfermedad estuviere reconocida por el responsable o mediare determinación firme en sede administrativa, quedando pendiente exclusivamente la controversia sobre la determinación del grado de incapacidad o sobre el monto de la indemnización según los baremos y tarifas legales, deberá procederse con arreglo al trámite sumarísimo adecuado a las siguientes disposiciones:

a) con la demanda deberán acompañarse todos los antecedentes documentados que obren en poder del actor, o indicarse el modo de recabarlos. Deberá indicar además, clara y fundadamente, la razón de su disconformidad con el grado o tipo de incapacidad acordado, con referencia a los baremos y demás factores de ponderación emergentes de la regulación de fondo, o el modo de cuantificar la indemnización según las tarifas de ley;

b) en el responde se deberá indicar claramente cuál es el grado de incapacidad que, a juicio del responsable, corresponde asignar a la víctima según la normativa de fondo, o cuál es el importe

correcto de la liquidación, acompañando toda la documentación que respalda su criterio. El

traslado de la demanda conlleva el apercibimiento de que su silencio o el incumplimiento de la

carga de contradecir fundadamente, dará lugar a que se dicte sentencia sin más trámite conforme

a derecho;

c) si demanda y contestación cumplieran los requisitos impuestos por los incisos anteriores, el

juez dispondrá sin más trámite la realización de la pericia médica, contable o ambas;

d) en el supuesto de que la víctima hubiere sido un agente público, esta vía sólo quedará

habilitada cuando se hubieren cumplimentado las instancias administrativas para la calificación

del infortunio y la determinación de la incapacidad, según los reglamentos administrativos, o

corresponda tenerlas por agotadas por mora de la Administración;

e) sólo será recurrible la sentencia definitiva;

f) la sustanciación de este trámite no suspende el derecho de la víctima a recibir las prestaciones

dinerarias o en especie ajenas a la controversia, ni inhibe la declaración del pronto pago respecto

del porcentaje de incapacidad o del resarcimiento reconocidos en sede administrativa o en el

responde.

**Art. 137. Opciones de procedimiento.** Cuando estuviere negada la ocurrencia del siniestro, su

naturaleza laboral, o cuando se demandare la reparación integral por daños y perjuicios, se

aplicará el trámite ordinario previsto en esta ley.

Las acciones que la víctima o sus derechohabientes tuvieren contra distintos responsables con



motivo del mismo siniestro podrán, en tal caso, tramitar en el mismo expediente, aplicándose las reglas del Código Procesal Civil y Comercial para los casos de acumulación subjetiva por conexidad de los hechos. En caso de haberse propuesto separadamente, el juez podrá ordenarla de oficio, procediéndose a la radicación ante el que hubiere prevenido, en decisión inapelable.

La prueba será común a todos los litigantes, pero la responsabilidad de cada demandado será juzgada conforme a los presupuestos propios de la pretensión intentada contra él.

#### **Capítulo IV. Extensión de responsabilidad**

**Art. 138. Extensión de responsabilidad.** La pretensión de extender la responsabilidad a

personas físicas o jurídicas no demandadas originariamente con base en la imputación de solidaridad pasiva, se regirá por las siguientes disposiciones:

I. Planteada antes de la audiencia de trámite importará la ampliación de la demanda, que deberá

ser contestada por el codemandado en los mismos términos y condiciones dispuestas en este

código para dicho acto procesal. Si ya se hubiera fijado fecha de audiencia, la misma se

suspenderá hasta tanto se conteste la demanda o se dé por decaído el derecho para hacerlo.

II. Si el pedido se realizara luego de la celebración de la audiencia pero antes del llamamiento de

autos, se formará incidente que no suspenderá el progreso del principal sino desde que éste se

encuentre en condiciones de ser fallado. Dicho incidente tramitará como juicio sumarísimo. El

juez resolverá ambas cuestiones en una sola sentencia.

III. Firme y consentido el llamamiento de autos, no se admitirá la tramitación conexas de ninguna

pretensión de extensión de responsabilidad basada en circunstancias que la actora -actuando con

razonable diligencia- pudo conocer antes de entonces.

Si los hechos fundantes de la solidaridad fueran sobrevinientes, o excusablemente desconocidos

por el acreedor conforme al criterio del párrafo anterior, la pretensión tramitará como juicio

sumarísimo circunscribiéndose el debate y la prueba a la procedencia o no de la causal invocada

para la extensión de responsabilidad. Esta limitación no rige si la sentencia contra el demandado

originario se hubiere dictado en rebeldía, o si la actora desistiere del proceso contra el codeudor condenado.

IV. Cuando la citación al codeudor solidario sea pedida por el demandado originario, se correrá traslado al actor para que en el término de cinco días exprese si tiene o no intención de incluirlo como codemandado. En caso afirmativo, se estará a las disposiciones de los párrafos precedentes según el estado procesal en que se encuentre la causa. En caso negativo, tramitará como una denuncia de litis y el tercero no podrá ser condenado en la sentencia.

#### **Capítulo V. Restitución de multas**

**Art. 139. Restitución de multas administrativas.** Una vez firme la sentencia que revoca la aplicación de una multa administrativa de policía del trabajo, o la reduce en su importe, la restitución tramitará ante los jueces de primera instancia por vía de apremio, bastando como título la copia certificada de la sentencia.

### **TITULO X**

#### **Capítulo Único. Ejecución de sentencia**

##### **Art. 140. Intimación. Impugnación de la planilla.**

I. Consentida o ejecutoriada la sentencia, el mismo juez que ha entendido originariamente en la controversia, previa liquidación íntegra y detallada, aprobada, de capital, intereses y costas, ordenará su ejecución intimando el pago al deudor.

II. Si se dedujere impugnación a la planilla practicada, la misma deberá incluir, además de sus fundamentos, una liquidación alternativa de la deuda conforme al criterio del impugnante. En caso de incumplimiento de estos recaudos, el juez o tribunal deberá considerar como no presentada la impugnación, sin perjuicio de ponderar la conducta del impugnante como abusiva.

En todos los casos, el juez resolverá conforme las pautas de la sentencia.

III. En el supuesto del párrafo anterior, la resolución que se dicte sólo será apelable cuando

rechace la impugnación. Elevados los autos, el tribunal de alzada dictará resolución sin más trámite, pudiendo las partes presentar un memorial facultativo dentro de los cinco días de radicación de la causa.

**Art. 141. Embargo y ejecución.** No efectuado el pago dentro de los tres días, se trabará

embargo en bienes del deudor, decretándose la venta de los mismos por el martillero que se designare, procediéndose conforme lo establecido en el Código Procesal Civil y Comercial para el cumplimiento de la sentencia de remate.

## **TITULO XI**

### **Capítulo Único. Medidas cautelares.**

**Art. 142. Embargo preventivo. Asistencia médica. Sustitución.** Además de las medidas

cautelares que correspondieren de acuerdo con lo dispuesto por el Código Procesal Civil y

Comercial, las que serán aplicables siempre que no resultaran incompatibles o no se

superpusieran con las establecidas en este código, antes de entablada la demanda o en el curso

del juicio, el juez, a petición de parte, según el mérito que arrojen los autos, podrá decretar

embargo preventivo en bienes del demandado y también disponer que éste proporcione sin cargo

la asistencia médica y farmacéutica requeridas por la víctima del accidente de trabajo o

enfermedad profesional en las condiciones previstas por la ley respectiva.

Especialmente podrá decretarse a petición de parte, sin fianza, embargo preventivo sobre bienes

del deudor, en los siguientes casos:

a) cuando se justifique sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar bienes

o que por cualquier causa, se hubiera disminuido notablemente su responsabilidad patrimonial,

en forma que perjudique los intereses del acreedor y siempre que el derecho del peticionante

surja verosímilmente de los extremos probados;

b) cuando exista sentencia favorable o confesiones expresas o fictas de hechos que hagan

presumir el derecho alegado;

c) cuando la existencia del crédito esté justificada con instrumento público o privado atribuido al

deudor, si la firma fuera reconocida o declarada auténtica;

d) en los supuestos en que, conforme las leyes de fondo, los trabajadores tengan privilegio

especial sobre los bienes.

En los supuestos de embargos preventivos ordenados, antes del dictado de la sentencia de mérito,

sobre fondos, recaudaciones, cuentas corrientes o cualquier otra modalidad que conlleve la

inmovilización de dinero, la regla será la sustitución de la cautelar, conforme valoración que efectuará el juez o tribunal acerca de la suficiencia del bien ofrecido. En caso de apelación, será otorgada con efecto devolutivo si ordena la sustitución. En caso de allanamiento tempestivo del peticionante al pedido de sustitución, las costas serán impuestas en el orden causado.

**ARTÍCULO 4º:** Derógase el art. 69.

**ARTÍCULO 5º:** En ocasión de ordenar el texto de la ley 7945 conforme a las disposiciones del presente, el Poder Ejecutivo actualizará las denominaciones de las unidades jurisdiccionales conforme a las equivalentes que les asigna la Ley Orgánica del Poder Judicial actualmente vigente, así como también las referencias a la "Ley Orgánica de los Tribunales" por la denominación que resulta de la ley 10160.

**ARTÍCULO 6º:** La presente ley entrará en vigencia a los 90 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial. Dentro del mismo plazo, el Poder Ejecutivo ordenará su texto conforme a las disposiciones de la presente ley, otorgando numeración correlativa como número 143 y siguientes a los artículos que en la Ley 7945 se designan a partir del art. número 125 (TITULO XII - PROCEDIMIENTOS ESPECIALES - CAPITULO UNICO - DESALOJO LABORAL).

Los juicios iniciados durante la vigencia de la Ley 7945 continuarán rigiéndose por sus disposiciones.

**ARTÍCULO 7º:** Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**SALA DE SESIONES, 8 de noviembre de 2007.**